



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 21 de mayo de 2025

Vistos los autos: “AMX Argentina S.A. c/ La Rioja, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, de los que

Resulta:

I) A fs. 114/142 vta. se presenta AMX Argentina S.A. y deduce acción declarativa, en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la Provincia de La Rioja, a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad de los párrafos segundo y tercero del artículo 18 de la ley 9662, impositiva anual provincial para el año 2015, y de la pretensión provincial de aplicar esa norma.

Sostiene que la provincia demandada pretende que la actora determine el impuesto sobre los ingresos brutos aplicando una alícuota diferencial superior, por la única y exclusiva razón de que tributa bajo el Convenio Multilateral y su jurisdicción sede no corresponde a la referida Provincia de La Rioja.

Dice que esa norma se encuentra en pugna con los artículos 9º, 10, 11, 31, 75 -incisos 1º, 10 y 13- y 126, todos de la Constitución Nacional. Agrega que la provincia quebranta la jerarquía normativa y grava el comercio interjurisdiccional con una alícuota mayor a la que resulta aplicable a los contribuyentes locales, creando así una aduana interior.

Expone que la mayor parte de sus ingresos en la provincia los obtiene de la actividad CUACM 642020 “Servicios de comunicación por medio de teléfono, telégrafo y télex”, pero dado que en el nomenclador provincial CAILaR para el año 2015 se prevé un código de actividad específico, calcula el

impuesto conforme a la actividad identificada con el número 642220. Cita a modo de ejemplo que, por el anticipo de enero de 2015, abonó por esa actividad la alícuota del 2,5%.

Más adelante, indica que la Dirección General de Ingresos Provinciales le notificó el 29 de junio de ese año una intimación a rectificar sus declaraciones juradas y a ingresar los importes que correspondieren, más intereses resarcitorios, bajo apercibimiento de verificar y determinar la deuda o de ejecutarla por vía judicial. De esa intimación surge que la empresa demandante habría tributado una alícuota incorrecta por las actividades 659892, 642020, 515921 y 521200, por lo que fue rechazada mediante una nota de fecha 21 de julio de 2015, la que, al momento de iniciar la demanda, no había obtenido respuesta.

Desarrolla las razones por las cuales, a su entender, se cumplen los requisitos para la procedencia formal de la acción declarativa. Además, reitera que la normativa cuestionada afecta al comercio interjurisdiccional y constituye una aduana interior, a la vez que pretende ejercer facultades reservadas al Gobierno Federal por la Ley Nacional de Telecomunicaciones y por la Ley Argentina Digital, violando el principio de igualdad previsto en la Constitución Nacional. Cita jurisprudencia del Tribunal en apoyo de su postura.

II) A fs. 145/147 dictaminó la señora Procuradora Fiscal, y sobre la base de esa opinión, a fs. 154/155 el Tribunal declaró su competencia originaria para entender en la presente causa. A su vez, hizo lugar a la medida cautelar solicitada en el escrito de inicio, por lo que dispuso que el Estado provincial debía abstenerse de reclamar a la accionante las diferencias de

*Corte Suprema de Justicia de la Nación*

alícuotas pretendidas en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos según el emplazamiento de fecha 17 de junio de 2015 (obstante a fs. 107), hasta tanto se dictara sentencia definitiva en estas actuaciones.

III) A fs. 194/207 la Provincia de La Rioja contesta la demanda y solicita su rechazo.

Tras las negativas de rigor, sostiene que no se reúnen los requisitos de procedencia de la acción, dado que no se configura una situación de incerteza que habilite la vía intentada -que es de carácter excepcional- ni la presencia de un agravio concreto que la sustente.

Destaca que la provincia puede gravar los servicios que desarrolla la actora, más allá de que sean de telecomunicaciones, y que lo que no puede hacer es regular directamente ese servicio. Agrega que no se explica concretamente cómo se produce el agravio económico que dé sustento a la impugnación efectuada y refiere que no existe trato discriminatorio, dado que todas las empresas telefónicas que desarrollan su actividad en la provincia no tienen su sede en La Rioja.

Por otra parte, rechaza que se constituya una aduana interior, ya que, a su entender, no se encuentra en juego un caso de comercio interprovincial, puesto que la actividad de la actora se desarrolla directamente en el territorio de la provincia demandada.

Por último, niega que se ejerzan facultades reservadas al Gobierno Federal y que se vulnere el principio de igualdad. Señala que “lo único que ha hecho la provincia demandada es el ejercicio de atribuciones que le corresponden en forma exclusiva y originaria, relativas al poder tributario que mantiene reservado” (fs. 204 vta.).

IV) A fs. 320 obra el dictamen de la señora Procuradora Fiscal acerca de las cuestiones constitucionales propuestas, que remite a lo dictaminado en su oportunidad en la causa en la causa CSJ 114/2014 (50-H)/CS1 “Harriet y Donnelly S.A. c/ Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de certeza”.

Considerando:

1º) Que, tal como lo ha decidido el Tribunal a fs. 154/155, esta demanda corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional.

2º) Que la acción deducida constituye una vía idónea para motivar la intervención del Tribunal, pues no se trata de dar solución a una hipótesis abstracta, sino que se propone precaver los efectos de la aplicación de la ley local 9662, a la par de fijar relaciones legales que vinculan a las partes en el conflicto (Fallos: 318:30; 323:1206 y 327:1034).

En el presente caso, se advierte que ha mediado una conducta estatal explícita de la demandada, dirigida a la aplicación de la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos que la aquí actora cuestiona (Fallos: 311:421 y 328:4198).

En efecto, de la prueba documental agregada a la causa se desprende que la actividad desplegada por la autoridad provincial demuestra que la controversia es actual y concreta (Fallos: 310:606 y 311:421, entre otros).

3º) Que en cuanto al fondo del asunto, la cuestión presenta sustancial analogía con la ya examinada y resuelta por el Tribunal en Fallos: 340:1480 y en la causa CSJ 114/2014 (50-H)/CS1 “Harriet y Donnelly S.A. c/ Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de certeza”, sentencia del 31 de octubre de 2017, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir en

*Corte Suprema de Justicia de la Nación*

cuanto fueren aplicables al caso de autos, en razón de brevedad y con el propósito de evitar repeticiones innecesarias.

4°) Que, por lo tanto, la aplicación de la ley impositiva que se cuestiona, en el caso concreto, al gravar con alícuotas más gravosas las actividades ya referidas de la actora, obstaculizaba el desenvolvimiento del comercio entre las provincias (ver intimación DGIP del 17 de junio de 2015, fs. 107).

5°) Que, en tales condiciones, a la luz de los preceptos constitucionales examinados en las causas citadas en el considerando 3° y de los criterios fijados por esta Corte a su respecto, en el *sub examine* queda en evidencia la discriminación generada por la legislación provincial en función del lugar de radicación de la sede del contribuyente, en tanto se lesionaba el principio de igualdad (Constitución Nacional, artículo 16), y se alteraba la corriente natural del comercio (Constitución Nacional, artículos 75, inciso 13, y 126), instaurando así una suerte de “aduana interior” vedada por la Constitución Nacional (artículos 9° a 12), para perjudicar a los servicios o productos foráneos, en beneficio de los prestados o manufacturados en su territorio, extremo que conduce a la declaración de invalidez de la pretensión fiscal de la demandada (Fallos: 340:1480).

Por ello, habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal, se decide: Hacer lugar a la demanda entablada por AMX Argentina S.A. contra la Provincia de La Rioja. En consecuencia, declarar la inconstitucionalidad de los párrafos 2° y 3° del artículo 18 de la ley 9662 de dicha provincia, como así también la de la pretensión fiscal plasmada en la intimación de la Dirección General de Ingresos Provinciales (DGIP) del 17 de junio de 2015. Con costas a la vencida (artículo 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Notifíquese, comuníquese esta decisión a la Procuración General de la Nación y, oportunamente, archívese.



ORIGINARIO

AMX Argentina S.A. c/ La Rioja,
Provincia de s/ acción declarativa de
certeza.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Parte actora: **AMX Argentina S.A.**, representada por los doctores **Walter César Keiniger, Mariana Inés Batallé y Sergio Daniel Vergara.**

Parte demandada: **Provincia de La Rioja**, representada por el doctor **Alejandro Raúl Durán Lobato**, con el patrocinio letrado del doctor **Alberto Manuel García Lema.**